

so de contrariedad de las partes; esa disposición debería entenderse derogada por el artículo 97 constitucional que se deja citado, según el principio universal de derecho, que la ley posterior deroga á la anterior, siendo la Constitución de fecha mas reciente, y sobre todo superior á toda ley secundaria, aun cuando esta fuera de fecha posterior que la ley de papel sellado; de conformidad con lo pedido por el Sr. Fiscal, se declara: El Juez segundo de Distrito de esta Capital es el competente para conocer del juicio promovido contra D. Julio Robreau por la multa que se le ha impuesto por infracción de la ley de 14 de Febrero de 1856, relativa al papel sellado.

Dévuélvase las actuaciones al Juzgado segundo de Distrito de México, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; remítase copia igual al tercero de lo civil para su conocimiento. Hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Suprema Corte de justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

Es copia. México, Noviembre 11 de 1873.
—*Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo, por el C. Santiago Calderon, en representacion de varios vecinos de Zimapam, contra las providencias dictadas por el Ayuntamiento de ese pueblo y puestas en ejecucion por el presidente municipal del mismo, para que por la fuerza armada y en uso de la facultad económico-coactiva, se hiciera efectivo el pago de rentas de unos terrenos que esa corporacion reputa ser bienes comunales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En este expediente que ha examinado el Promotor y es relativo al juicio de amparo interpuesto por el C. Santiago R. Calderon como apoderado de varios vecinos del mineral de Zimapam y la Encarnacion, contra el ciudadano presidente municipal de aquel Distrito, se hallan consignados varios hechos que deben sujetarse á prueba, puesto que ellos descansan en el derecho de propiedad.

Los quejosos aseguran que son poseedores de varios terrenos ubicados en el expresado mineral desde el año de 1717, y que en consecuencia, la corporacion municipal ningunos derechos tiene ni puede tener en dichas tierras. La corporacion municipal reconoce este origen; pero añade que por algunas causas fueron cedidas dichas tierras á la corporacion expresada.

Esta circunstancia obliga al suscrito á pedir á ese juzgado se sirva abrir este negocio á prueba por el término que señalan los artículos 10 y 11 de la ley de 20 de Enero de 1869, pues con lo que resulte de las pruebas, ya podrá extender su dictámen sobre lo principal. Pachuca, Febrero 25 de 1873.—*M. Sanchez.*—(Firmado.)

Es copia que certifico. Pachuca, Abril 7 de 1873.—*F. Briseño*, secretario.

Alegato del C. Promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor que habla pasa á dictaminar en el juicio de amparo interpuesto por los vecinos del mineral de la Encarnacion y Zimapam, contra su presidente municipal, por violación de las garantías consignadas en los artículos noveno y diez y seis de la Constitucion general:

Desde luego expone: que segun copia de la escritura otorgada por D. Agustin de la Barrera, vendió este á los diputados mineros, D. Jorge del Barrio, D. Lucas Labra y demas vecinos y comun de aquellos pueblos, once sitios de tierra, bajo condicion de que tales sitios fueran de todos los vecinos y de que cada uno de por sí, libres de censo, memoria, capellanía, vínculo y mayorazgo, obligacion especial, ni general, ni de otro gravamen, y de que nadie pudiera vender ni enagenar los terrenos vendidos, sino que en todo tiempo debian estar sujetos al dominio de la vecindad. Sin embargo de todo esto, y de ser tan terminantes las cláusulas que se acaban de citar, constantes á fojas 3, 4 y 5 del cuaderno de prueba, por varias disposiciones posteriores, y con pretextos diversos, las autoridades y aun la diputacion minera de 1820, obligaron y cedieron los mencionados sitios á la corporacion municipal de Zimapam, título ahora que se alega para la defensa de la expropiacion, y que por ninguna causa puede ser legítimo.

Basta la simple lectura del documento á que se refiere el que suscribe, para convenirse de que los terrenos en litigio, por su objeto y fin se encuentran bajo las mismas condiciones que los de los vecinos de la municipalidad de Zempoala, á quienes la Justicia federal amparó contra la autoridad

que los había expropiado (sentencia de la Corte Suprema en 24 de Agosto de 1872.) Verdadero como lo es, que estos terrenos son comunales ó de comunidad, y de que no han sido de la propiedad del municipio que los pretende, su adjudicacion á Don Juan Hahn, con arreglo á la ley de 25 de Junio de 1856, es contraria y opuesta á las supremas resoluciones números 57 de 17 de Setiembre, 94 de 11 de Noviembre, 129 de 20 de Diciembre de 1856, 142 de 2 de Enero de 1857, 161 de 5 de Setiembre de 1858, 173 de 29 de Abril de 1861 y lo de Diciembre de 1862, y á las garantías que otorga la Constitucion de la República en sus artículos 16 y 27.

Estas razones que ha tenido presentes el Juzgado y la Corte Suprema al pronunciar sus ejecutorias de 15 de Diciembre de 1869, y la de Marzo de 1871, convencen al Promotor de la justicia que asiste á los solicitantes, y á pedir por lo expuesto y lo que consta de autos, se sirva declarar: que por haber violado el C. presidente municipal de Zimapam en las personas de los ciudadanos que representa el C. Santiago R. Calderon, las garantías que otorga el pacto fundamental en sus artículos 9, 16 y 21, la Justicia federal los ampara y protege.

Pachuca, 28 de Marzo de 1873.—*M. Sanchez*.—Firmado.—

Es copia que certifico. Pachuca, Abril 8 de 1873.—*F. Briseño*, secretario.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Pachuca, Abril 4 de 1873. Visto este juicio promovido por el C. Santiago Calderon en representacion de varios vecinos de Zimapam, pidiendo amparo y proteccion contra el C. presidente municipal por haberles prohibido reunirse en junta sin conocimiento de la autoridad respectiva, y por haber dado órdenes contra ellos para que por la fuerza armada se hiciera efectivo el

pago de rentas de los terrenos que poseen, sin ser autoridad competente, sin haber causa legal que pudiera motivar tal procedimiento y sin haber librado para cada caso, mandamiento alguno escrito, con cuyos procedimientos reputan violadas en sus personas las garantías que otorga la Constitución general en sus artículos 9 y 16.

Visto el informe de la autoridad responsable en que manifiesta, primero: que los terrenos que poseen los quejosos son propios del ayuntamiento ó asamblea municipal; segundo: que las rentas son causadas por el dispute de dichos terrenos; tercero: que los procedimientos empleados para cobrarlos, se fundan en la facultad económico-coactiva que las leyes conceden á los ayuntamientos para cobrar las *rentas municipales*; cuarto: que la resistencia de los vecinos á los procedimientos coactivos del exactor, motivaron el empleo de la fuerza armada, y quinto: que no es cierto haberse prohibido reunirse en junta á los representados por el C. Calderón.

Vistos por último los documentos en que la autoridad responsable y los agraviados fundan sus respectivas intenciones; los alegatos producidos y la citación para sentencia.

Considerando en cuanto al artículo 9 de la Constitución: primero, que la prohibición de reunirse en junta varios vecinos de Zimapan sin conocimiento de la autoridad respectiva, consta expresamente en la comunicación oficial de fojas 2 cuaderno principal; y segundo, que apareciendo de autos que las reuniones de los quejosos tenían por objeto promover lo conveniente á la defensa de los terrenos que creen pertenecerles y siendo este objeto demasiado lícito, es inconcuso que el presidente municipal ejecutor inmediato de los acuerdos de la asamblea, ha violado la garantía del referido artículo 9.

Considerando respecto de la garantía del artículo 16: que el C. presidente municipal de Zimapan, sea que proceda en virtud

de atribuciones propias, ó como ejecutor de las providencias de la tesorería ó asamblea municipal, no ha debido apremiar á los quejosos al pago de las rentas que adeudasen, con el ejercicio de la facultad coactiva y empleo de la fuerza armada, porque, primero, esta facultad solo se concede para el cobro de *impuestos ó contribuciones*, y las rentas de terrenos no tienen este carácter; segundo, el derecho de cobrar esta clase de rentas procede del derecho de administrar bienes raíces, y las corporaciones civiles carecen de este derecho (artículos 25 de la ley de 25 de Junio de 1856 y 27 de la Constitución general) sin que á esta razón pueda objetarse, que de la estricta aplicación de esas disposiciones se originan graves é irreparables perjuicios á los municipios, porque son mas graves y mas trascendentales todavía los que resulten de la inobservancia é infracción de la Constitución y de las leyes; tercero; los ayuntamientos, con respecto á la administración de sus propios, caso de tenerlos, legalmente son considerados como individuos particulares y no pueden por lo mismo ejercer violencia para reclamar sus derechos (artículo 17 de la misma Constitución), entendiéndose fácilmente que la resistencia de los llamados arrendatarios en pagar las rentas que adeudaren, solo puede motivar un procedimiento judicial ordinario, pero de ningún modo el ejercicio de potestad coactiva y el empleo de la fuerza armada; y cuarto, el ejercicio de dicha potestad no es legal cuando el derecho del fisco no es claro é indudable (artículos 2 y 3 de la ley de 20 de Enero de 1837), y en el caso presente, el derecho del fisco municipal no está nada claro, disputándosele como se le disputa por los quejosos con muy buenas razones y documentos, la propiedad de los terrenos que causan las rentas de que se trata.

Considerando, por último: que no es de resolverse sobre la solicitud que en el alegato hace el C. Calderón, despues de probar con muy buenos fundamentos que los ter-

renos que se mencionan en estos autos son de la propiedad de los vecinos de Zimapam y no de la corporacion municipal, para que se ampare por violacion del artículo 27 de la Carta federal, contra la adjudicacion que de parte de dichos terrenos se hizo á los empresarios de la ferrería de la Encarnacion, contra la Suprema resolucion de Noviembre de 1856 que los declaró sujetos al denuncia y adjudicacion de la ley de 25 de Junio de 1856, y contra la serie de actos ejercidos por la expresada corporacion para apropiárselos, despojando á los legítimos dueños, por que el presente recurso no se ha sustanciado con respecto á este punto; ni acerca de él se ha oído á la autoridad ó autoridades responsables de los actos nuevamente reclamados.

Con fundamento de los artículos 9, 16, 101 y 102 de la Constitucion general, se decreta: que la Justicia de la Union ampara y protege á los vecinos de Zimapam representados por el C. Santiago Calderon, contra las disposiciones del C. Presidente municipal del mismo lugar, por las que se prohíbe á los quejosos reunirse en junta sin conocimiento de la autoridad respectiva, y se les cobra con la facultad coactiva y empleo de la fuerza armada, las rentas que estan adeudando, por que semejantes disposiciones atacan las garantías que otorgan los citados artículos 9 y 16. Hágase saber, publíquese, sáquense las copias respectivas para el Semanario, y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para los efectos legales. Así sentenció y firmó el C. Lic. Miguel Mejia, Juez de Distrito de Hidalgo. Doy fé.—*M. Mejia.*—*Francisco Briseño.*

Es copia que certifico. Pachuca, Abril 15 de 1873.—*H. Briseño.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 6 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Hidalgo, por el C. Santiago Calderon, en representacion de varios vecinos de Zimapam, contra las providencias dictadas por el ayuntamiento de ese pueblo y puestas en ejecucion por el presidente municipal del mismo, para que por la fuerza armada y en uso de la facultad económico coactiva se hiciera efectivo el pago de rentas de unos terrenos que esa corporacion reputa ser bienes comunales, y que los representados del C. Calderon manifiestan haber poseído y poseen como de su exclusiva y legítima propiedad, así como contra la prohibicion que se le impuso con este motivo de reunirse en junta sin conocimiento de la autoridad respectiva, cuyas resoluciones y providencias constituyen, en concepto de los quejosos, una violacion de las garantías que otorgan los artículos 9 y 16 de la Constitucion de la República; y

Considerando: Que la facultad económico coactiva concedida á las autoridades administrativas por la ley de 20 de Enero de 1837, lo ha sido unicamente para los casos en que el derecho fiscal es claro é indudable, como lo declara de una manera terminante el artículo tercero de esta ley: que los títulos, de propiedad de los terrenos en cuestion que tienen otorgados á su favor los vecinos de Zimapam que han promovido este recurso, no aparecen tan absolutamente desprovistos de valor que pudieran haber sido desechados de plano como un fútil pretexto para eludir el pago de arrendamientos, sino que por el contrario, tal cual se presentan, merecen que se les respcte, mientras tanto la autoridad judicial, única competente para ello, decida previa la correspondiente desquision sobre su validez ó nulidad: que el ayuntamiento de Zimapam no siendo el Tribunal competente para resolver de una manera definitiva por sí y ante sí que eran

de propiedad comunal unos terrenos sobre los cuales los derechos del municipio son dudosos, no ha tenido tampoco, por los motivos indicados, ninguna facultad para mandar exigir el pago de arrendamientos por medio de la fuerza armada, y por consiguiente, al ponerse en ejecucion tal providencia se ha violado el artículo 16 de la Constitucion federal, que otorga no poder ser nadie molestado en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Que aunque el presidente municipal ha negado se prohibiera á los quejosos reunirse en junta sin conocimiento de la autoridad respectiva, obra en autos la órden original que contiene tal prohibicion, y que teniendo las recusaciones que se trataba de impedir un objeto enteramente lícito, cual era el de acordar en ellas todo lo conducente á la mejor defensa de sus derechos, la restriccion que se les impuso ha sido contraria al artículo 9 de la Constitucion, que proclama el derecho absoluto de reunirse y asociarse con un fin lícito. Que no es de resolverse en este juicio sobre la solicitud de los poderdantes del C. Santiago Calderon, para que se declaren nulas las adjudicaciones que de varios terrenos se hicieron á los empresarios de la ferrería de la Encarnacion, por no haber versado el recurso sobre estos hechos, no habiéndose hecho tal solicitud sino en los mismos alegatos que presentaron con posterioridad.

Con fundamento de los artículos 9, 16 y 101 de la Constitucion federal, se decreta: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Hidalgo en 4 de Abril del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los vecinos de Zimapam representados por el C. Santiago Calderon, contra las disposiciones del presidente municipal del mismo lugar, por las que se prohíbe á los quejosos reunirse en junta sin previo aviso de la autoridad respectiva, y se les cobra con la facultad coactiva y em-

pleo de la fuerza armada, las rentas que se supone están adeudando.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*Pedro Ordaz.*—*M. de Castañeda y Ndjera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 11 de 1873.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, por Orosio Gutierrez, contra el Gefe político de Tehuantepec, por haberlo juzgado y sentenciado á muerte conforme á la ley de 18 Mayo de 1871.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal alegando para definitiva, dice: que ha visto el presente juicio de amparo promovido por Orosio Gutierrez contra la providencia decretada por el C. gefe político del Distrito del Estado de Tehuantepec, en virtud de la cual y con fundamento del artículo tercero de la ley de 18 de Mayo de 1871, declarada vigente por la de 23 de Mayo de 1872, lo condenó por el delito de asalto y robo á la última pena.